

PERIODO
PRESIDENCIAL
002597
ARCHIVO

INFORME DE ANALISIS

(al 4 de septiembre de 1992)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO: la crisis de RN y sus efectos

El "caso Piñera", que ha concitado la atención pública durante las últimas semanas, no se ha decantado aún del todo. Sin embargo, existen ya abundantes elementos de juicio como para intentar un análisis de los hechos, de su impacto y de los posibles escenarios que resulten. Pese al carácter preliminar del análisis y la cautela que debe tenerse a la hora de hacer una proyección a largo plazo (compromisos electorales de fines de 1993), se pueden establecer algunas conclusiones parciales.

Básicamente, el presente informe aborda dos ámbitos del tema: los efectos del "caso Piñera" en la derecha, y el nuevo escenario que podría configurarse para la Concertación.

I. Los efectos del "caso Piñera" en la derecha.

El espionaje al senador Piñera es el episodio más reciente de una disputa de fondo en Renovación Nacional. No es del caso analizar aquí sus causas remotas ni el itinerario de los hechos que configuran el "caso". Pero resulta imprescindible anotar, para situar el episodio en el debido contexto, la que es, si duda, su causa próxima: el "buen" desempeño de la derecha en las pasadas elecciones municipales.

En un informe previo se acuñó el concepto de "paradoja del triunfo" para reflejar una situación caracterizada por el virtual derrotismo con que el mundo gubernamental reaccionó ante los resultados del 28 de junio, pese a ser objetivamente el vencedor de esa jornada, y el triunfalismo con que, a su vez, la derecha evaluó su propio desempeño electoral, pese a ser uno de los sectores que objetivamente perdió en los comicios municipales.

Una situación paradójica similar es lo que mejor explica el desencadenamiento de la presente crisis en RN. En efecto, la sensación de triunfo con que, particularmente dentro de ese partido, fue acogido el 29,8 por ciento de votos que la derecha logró el 28 de junio, tuvo tres consecuencias inmediatas.

La primera, fortalecer a Andrés Allamand en la presidencia de RN y revitalizar la conducción que le imprimía, con el apoyo del grupo de "la patrulla juvenil". A grandes rasgos, dicha conducción suponía orientar al partido en una perspectiva de estilo y contenido más liberales y dinámicos que los que inspiran al sector "jarpista", caracterizado por sesgos tradicionales de base agrícola y oligárquica. La segunda consecuencia fue la proyección adquirida por la candidatura Piñera, precisamente dado lo anterior. Por último, se fortaleció la "Coalición para el Progreso", que supone el establecimiento de un modus vivendi entre RN y la UDI, de hegemonía neo-liberal que, a la larga, no resulta competitivo (como quedó demostrado en las municipales).

Antes del 28 de junio, Jarpa "ensayó" diversos nombres de eventuales candidatos de RN para la carrera por la Presidencia de la República. Ninguno, sin embargo, pareció concitar entusiasmos suficientes en la propia RN y sus aliados. En cualquier caso, y a pesar de la inviabilidad de tales nombres y del capital adquirido por Allamand y "la patrulla juvenil" tras las municipales, la resistencia "jarpista" a Piñera se mantuvo intacta. Como lo reconoce Alberto Espina en "La Nación" (30 de agosto), fue esta resistencia del sector que, sin duda, es mayoritario dentro de RN la que motivó a estimar conveniente que Evelyn Matthei "probara si realmente tenía posibilidades de captar la adhesión necesaria".

Ese paso, de tan escasa visión estratégica, ha tenido para RN tanto repercusiones internas como externas.

1) **Consecuencias internas:** ellas saltan hoy a la vista y no requieren de mayores explicaciones.

- * escisión de "la patrulla juvenil", al introducir competencia sin regulación en su propio seno;
- * captura del mattheísmo por los "jarpistas", sector al que necesariamente E. Matthei tenía que volcarse en busca de la adhesión que a Piñera le faltaba;
- * socavamiento de la proyección de Piñera, que pasó a enfrentar un nombre con los atractivos de que carecían los nombres ensayados previamente por Jarpa;
- * debilitamiento de la conducción de Allamand, con el efecto de fondo sobre la orientación de RN;
- * reposicionamiento del "jarpismo" y proyección de la candidatura de Jarpa. Esta posibilidad no debe descartarse. Por el contrario, con el debilitamiento de "la patrulla juvenil" el "jarpismo" se ha reposicionado dentro de RN, de acuerdo, por lo demás, a su peso y tamaño en ese partido. Añádase que, a falta aún de que el terremoto del "caso Piñera" produzca su última réplica (el veredicto del proceso que se sigue en tribunales por el espionaje), lo más probable es que, cuando dicha réplica se produzca, la que aparezca públicamente afectada sea la candidatura de E. Matthei. Jarpa, en resumen, habrá retenido su opción después de que el "caso" concluya; y
- * la "alessandrización" de RN, como expresión del sentido que deben adquirir los estilos y contenidos de esta agrupación política.

2) **Consecuencias externas.** Atienden a las relaciones de RN con la UDI:

- * **Paridad RN-UDI.** Parece obvio que RN ha perdido parte de la ventaja que, tras los resultados de las municipales, había obtenido sobre la UDI para lograr que el candidato presidencial de la derecha fuese de sus filas. El espionaje y el escándalo consiguiente han prácticamente clausurado las posibilidades de Piñera y de E. Matthei para conseguir la nominación. De ser así, RN estaría sin candidatos propios que postular.
- * **Probable candidatura de un tercero.** RN luchará para que el candidato presidencial de la derecha en 1993 sea de sus filas. Este partido ha esgrimido argumentos de índole histórico-política contra la candidatura de un independiente, que beneficia a su "socio", y eminentemente políticos contra la candidatura de un miembro de la UDI. De aquí que la posibilidad de que RN nomine a un tercer candidato ha aumentado, y así lo reconoce ya el propio Allamand. Sobre todo, si se admite que el nombre del senador Jarpa sigue vigente. Podría argumentarse que la viabilidad de Jarpa está en entredicho tras la crítica levantada en su contra por Allamand a propósito de la conducta del senador en el "caso Piñera". Sin embargo, la escisión de la "patrulla juvenil" y el consecuente debilitamiento de la posición de Allamand resta fuerza al presidente de RN y su sector para oponerse a Jarpa.
- * **Postergación del horizonte competitivo con la Concertación.** La crisis de RN a raíz del "caso Piñera" supone un desgaste difícil de revertir, por el momento. Esto significa que el 29,8 por ciento obtenido por la derecha en las municipales no tendría el carácter de "piso", tal como le ha sido adjudicado por diversos analistas, sino más bien el de "techo". Hay que agregar que, más allá del probable efecto del "caso Piñera", existe el dato objetivo de que la derecha perdió varios puntos porcentuales de votación. Esto implica que, con todo y dar la batalla electoral de 1993 como si la derecha fuese una auténtica alternativa, lo cierto es que la tesis de postergar el horizonte de competencia con la Concertación para después del próximo período de gobierno ha adquirido cada vez mayor fuerza.
- * **Eventual curso de colisión con la UDI.** Obviamente, los esfuerzos de la UDI estarán dirigidos a evitar la nominación de Jarpa y lograr, si no la designación de un candidato de sus filas, al menos la de un independiente. Puestos en campaña, un candidato así daría oportunidad a la UDI para crecer. Si RN no se aviene a esta alternativa y su candidato es Jarpa, el curso de colisión con la UDI quedará planteado. Esta eventualidad no es descabellada: si quien está tras el "caso Piñera" se ha mostrado

dispuesto a sacrificar a RN y si el horizonte más realista de competencia con la Concertación se sitúa en el largo plazo (y no en 1993), entonces no parece absurdo pensar que la alianza RN-UDI sea también materia desechable.

Los efectos del "caso Piñera" y la crisis de RN deben evaluarse también en relación con los sectores que le son afines y, en concreto, los militares y los empresariales. Sin embargo, en estos ámbitos el análisis se hace más difícil y opaco. En principio, podría decirse que, hoy por hoy, la imagen de RN se ha visto deteriorada, tanto en relación con el empresariado como con los militares. Sin embargo, y como veremos enseguida, ambas conclusiones admiten matices que pueden alterarlas sustancialmente.

3) **La hipótesis de un proyecto estratégico en la derecha.**

Sin afán de construir una variación del "mito conspirativo" con que se suele analizar a la derecha, lo cierto es que el "caso Piñera" contiene una serie de elementos que inducen a pensar en la existencia de un cálculo de tipo estratégico. De hecho, no parece aventurada la hipótesis de que pudiera existir un proyecto estratégico para reconstruir a la derecha. Quizás no se trate de un proyecto pulido y acabado, sino de una orientación. Pero diversos indicios apuntan a que esta hipótesis no es descartable. Las premisas sobre las que ella se levanta son las siguientes:

1º) Cualquier estudio objetivo de las cifras arrojadas por las elecciones del 28 de junio muestra que el triunfalismo con que RN reaccionó, a instancias de Allamand, no tiene un correlato con la realidad y responde más bien a una manipulación de la imagen del partido.

2º) Contrariamente al triunfalismo que se muestra y agita, lo que ocurrió en las municipales fue una derrota. La derecha ni siquiera mantuvo su votación, sino que perdió varios puntos porcentuales. No hay, por tanto, ningún triunfo que esgrimir y sí, en cambio, un fracaso que adjudicar. La derecha que perdió es una derecha orientada por sectores neo-liberales, es decir, por el grupo de la "patrulla juvenil" y la UDI. Fue una derrota de esta alianza.

3º) El fracaso tiene varios factores que lo explican, pero ellos pueden resumirse en uno: la existencia de una derecha con dos sectores (no necesariamente coincidentes con los límites de cada partido) que, pese a aquella alianza, no se complementan sino que compiten y que le ofrecen al Gobierno interlocutores alternativos para su estrategia legislativa.

4º) Respecto de al menos algunas reformas constitucionales planteadas por el Gobierno, el sector neo-liberal no es una garantía de rechazo. Tanto Allamand como miembros de la UDI han expresado una disposición más flexible en ciertas materias (reforma

electoral, LOC de las FF.AA., senadores "designados", etc.).

5º) No caben dudas razonables de que el próximo gobierno sea de la Concertación. La apuesta de que la Concertación minará las bases de una alianza que tiene en sus manos la conquista de un nuevo período presidencial es absurda. Esto no quita que la oposición haga esfuerzos apuntados en esa perspectiva ni que los roces propios de toda competencia creen dificultades a la Concertación. Pero desde la derecha no debe parecer políticamente cuerdo que la Concertación desate un tipo de competencia que haga inviable un próximo gobierno de esta alianza.

6º) Lo previsible es que este segundo gobierno de la Concertación continúe la obra del actual, tanto en lo que se refiere a materias de reformas (que probablemente quedarán inconclusas ahora) como en la orientación de la economía. Es decir, en lo político se va a insistir en un programa de desarticulación de los equilibrios institucionales; programa para el que es funcional la existencia de dos partidos opositores y la eventual flexibilidad que ofrece el sector neo-liberal en orden a aceptar algunos cambios. En lo económico, la continuidad del modelo de economía de mercado y su aplicación (por lo demás exitosa) con rectificaciones que lo corrigen para dotarlo de un sentido más social y equitativo, deja a la derecha sin ofertas económicas alternativas y que puedan concitar más apoyo popular.

7º) Lo anterior implica que se deseche la ilusión de levantar a la derecha como alternativa real para 1993 (aunque la campaña se enfrente como si lo fuese).

Dadas estas premisas, si la derecha quiere tener una opción real después del próximo gobierno, entonces la estrategia lógica debería apuntar en la siguiente perspectiva:

- a) **Rechazar las reformas ahora.** No es funcional para los intereses políticos de la derecha conceder las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno. El actual sistema contiene un conjunto de ataduras y restricciones que hacen extremadamente difícil que los gobiernos de coalición se mantengan en el largo plazo. Esto permite avizorar serias dificultades para la Concertación más allá de 1994.
- b) **Rechazar la reducción del período presidencial.** Tampoco es funcional para los intereses de la derecha aceptar la disminución del período presidencial. Una presidencia de ocho años, en el marco de restricciones del actual sistema político-institucional, hace inviable la Concertación y termina con la propia Democracia Cristiana extremadamente desgastada y debilitada.

- c) **Aprovechar las debilidades del adversario.** Todo lo anterior puede potenciarse, en el corto plazo, con los roces que genere la competencia interna para definir el abanderado presidencial de la Concertación y, en el mediano y largo plazo, con una casi inevitable mayor presión social y con la idea que anima a sectores concertacionistas en el sentido de que el próximo gobierno debe ser menos suprapartidario.
- d) **Unir a la derecha.** La derecha debe ser una sola y debe responder a una orientación que la haga competitiva en el futuro. Sin embargo, unir a la derecha y hacerla competitiva no significa unirla y dotarla de mayor eficiencia electoral tras un programa de rasgos todavía más neoliberales. Por el contrario, para alcanzar aquellos objetivos, la derecha debe levantar un programa que responda a sus sectores tradicionales, incluidas las FF.AA. Es decir:
- * en un mundo de moral liberal y supuesta práctica política corrupta, ofrecer moral tradicional, probidad y orden;
 - * en un mundo de economía de mercado abierta, con sectores productivos (agrícolas e industriales) expuestos a la competencia internacional, ofrecer alguna protección;
 - * en un escenario internacional políticamente unipolar, de hegemonía estadounidense, y económicamente fluido, de crecientes interrelaciones y dependencias, en que se asiste al riesgo de una progresiva opacidad de los conceptos básicos de nación y soberanía,¹ el programa de la derecha debe ofrecer márgenes para un "camino propio", que no signifique rechazar las nuevas realidades, pero que tampoco suponga debilitar innecesariamente al país en ninguno de los ámbitos fundamentales.

En resumen, se trata de un programa que apele a sectores que han sido las bases tradicionales de la derecha en la Iglesia Católica, en el empresariado y en las FF.AA.

Ahora bien, en el corto plazo, el objetivo de quienes pudieran sostener el proyecto de reconstrucción de la derecha implica dos cosas:

¹ Es un error creer que el análisis del nuevo escenario mundial y sus consecuencias para Chile, contenido en la reciente "clase magistral" del Comandante en Jefe del Ejército, está sólo dirigido contra los sectores pacifistas y progresistas. También apunta contra una audiencia neo-liberal.

- * primero, evitar la competencia entre sus agrupaciones políticas, y
- * segundo, impedir que el próximo gobierno de la Concertación cuente con interlocutores alternativos que le permitan desarrollar una estrategia legislativa similar a la que se usó durante la transición.

Si el proyecto de reconstrucción de una sola derecha tras un programa como el descrito pasa por eliminar la competencia de la UDI, entonces sólo hay dos posibles soluciones: una, cooptarla para una fusión similar a la que realizaron conservadores y liberales en la década de los años sesenta y que dio origen al Partido Nacional; otra, destruirla.

La primera solución no parece viable. Es difícil que dos proyectos de derecha tan disímiles, cuyas relaciones se han zanjado con tensiones y rupturas, puedan congeniar en el largo plazo y rendirse uno de ellos a la hegemonía del otro. En consecuencia, la segunda solución no es descabellada: basta liquidar la posibilidad de una lista única RN-UDI con pactos por omisión.

Como se sabe, la proyección de los resultados de las municipales a 1993 reduce a la UDI a una mínima presencia parlamentaria. Extremando el caso, RN (y la derecha) no necesita la Cámara de Diputados para contener al futuro Gobierno concertacionista (que, por lo demás, estaría en condiciones de conseguir dos tercios de los escaños). Le basta con atrincherarse en el Senado. En 1993, la UDI debe poner en juego una senaturía y bien podría ser que la perdiera en favor de un RN.

Obviamente, las condiciones para una solución como ésta no están maduras todavía. Desechar la "Coalición para el Progreso" requiere, en primer lugar y en lo inmediato, que la "patrulla juvenil" de RN fracase en su intención de reconstituirse. Esta perspectiva, a su vez, pasa por la renuncia de Piñera a la pre-candidatura (porque ha sido objetivamente más afectado que E. Matthei en esta crisis) y su apoyo a la postulación de E. Matthei. La diputada ha dado ya significativos pasos en esa dirección (perdón a Piñera, gestiones para evitar que Piñera sea pasado al Tribunal Supremo del partido, etc.). Falta que el senador anuncie su renuncia.

En fin, la reconstitución de la "patrulla juvenil" tras la pre-candidatura de E. Matthei tampoco es garantía de que la "Coalición para el Progreso" vaya a mantenerse y a elegir a la diputada como candidato de la alianza para las elecciones de 1993. Resulta difícil creer que la UDI y otros sectores (por ejemplo, los militares) se avengan a aceptar como su abanderado presidencial a una persona que lleva el apellido Matthei.

II. Un posible nuevo escenario para la concertación

A partir de las consideraciones anteriores se pueden desprender algunas conclusiones que afectan a la Concertación y a la manera como ésta enfrenta el tema de la sucesión presidencial y la continuidad de la alianza. A efectos del análisis, ellas serán presentadas en una consideración general y en tres posibles desarrollos políticos:

- a) **Consideración general.** Está referida a la enorme interrogante que queda planteada respecto de la viabilidad de una candidatura presidencial de la derecha con capacidad de amagar el éxito de la opción de la Concertación. Si la evolución es la que se ha prefigurado más arriba, en el sentido de que un proyecto estratégico como el descrito va dirigido a sacrificar las pretensiones de corto plazo de la derecha, ello supone que la estabilidad del país y la alternativa de gobernabilidad recaerán única y exclusivamente en la Concertación.

Este escenario pone sobre los hombros de la alianza de gobierno y, en particular, sobre el actual equipo político, una gran responsabilidad en términos de proyección y continuidad de la Concertación. Se trata, como se ha afirmado reiteradamente en estos informes, de una sexta tarea del presente Gobierno, cual es transformar la alianza, que nació marcada por el sello de la transición, en una coalición estratégica con un proyecto nacional.

- b) **Desarrollos políticos.** Teniendo en cuenta lo anterior, los efectos probables de la crisis de RN sobre el campo concertacionista pueden ser los siguientes:

- * Un primer efecto es aquel en el cual la debilidad de la alternativa presidencial de la derecha tiende a provocar un relajamiento de la conciencia de la necesidad de proyección de la Concertación. Este relajamiento de la disciplina y adhesión a la coalición puede llevar a que se incentiven o toleren ciertas prácticas y estilos que en los momentos iniciales de la transición habrían sido consideradas inconvenientes.

Ejemplos que grafican lo anterior son el debate abierto respecto del menor carácter suprapartidario que, a juicio de algunos, debería tener el futuro Gobierno o las referencias a las relaciones internas de la alianza como meras relaciones de fuerza.

- * Un segundo efecto es el que puede llegar a expresarse en la convicción de que, al disminuir la capacidad de la derecha como alternativa de triunfo en Diciembre del 93, sea posible (e, incluso, positivo) que la Concertación compita en una primera vuelta con dos candidatos presidenciales.

Si bien este escenario no resulta favorecido por ninguna de las actuales pre-candidaturas, las que se han manifestado claramente como opciones en competencia dentro de la Concertación, lo cierto es que no se puede predecir hoy cuál será el comportamiento de los comandos electorales y de los partidos después de que las pre-campañas estén en desarrollo. Eso dependerá, precisamente, del impacto que ellas sean capaces de provocar en el país.

La racionalidad que hasta ahora ha predominado en todos los actores de la Concertación puede tender a desaparecer en el marco propio de una competencia electoral. Lo que ha sucedido en la derecha no puede dejarnos indiferentes, pues ningún sector está libre de que en su seno se gesten problemas similares. Las dificultades que se han presentado en la aplicación y respeto del protocolo para la elección de alcaldes es una muestra elocuente de que en los niveles inferiores de los partidos la conciencia coalicionista es bastante más débil que en las cúpulas partidarias. En la eventualidad de que los mecanismos de carácter consociativo, que se requieren para regular la competencia interna en la alianza, no cumplan la finalidad de limar roces y dificultades, un clima de mutua animadversión a nivel de bases partidarias sería enormemente disruptivo para las pretensiones de mantener y proyectar la Concertación.

Los riesgos de una primera vuelta con dos candidatos concertacionistas para la estabilidad del proceso de consolidación democrática son también evidentes. En efecto, una elección en que se tienda a reconstituir los tres tercios de la política chilena no puede tener otro efecto sino el debilitamiento de las instituciones democráticas. El país quedaría expuesto, por un lado, a la posibilidad de un triple empate o, por el otro, a la repetición del fenómeno de 1964 en el cual la derecha se transforma en árbitro de la elección en la segunda vuelta.

- * Finalmente, una tercera consecuencia es el fortalecimiento de la opción presidencial del senador Frei que un eventual (y probable) retiro de la candidatura de Sebastián Piñera puede producir. La opción Piñera es la que más amaga la expansión de la candidatura Frei hacia el electorado de centro derecha. Al desaparecer aquélla, y ser probablemente reemplazada por otra de corte más tradicional o de contenidos más conservadores, la tendencia previsible es que parte importante de ese electorado derive hacia Frei.

Puede argumentarse que el fortalecimiento de la opción de Frei hace menos creíble las opciones que puedan oponérsele y, por lo tanto, morigeraría la competencia interna en la Concertación y reduciría la posibilidad de dos

candidatos para la primera vuelta.

Pero también es posible pensar que, precisamente a raíz del fortalecimiento de la opción Frei, las dificultades para llegar a una negociación en la Concertación que arroje equilibrios básicos entre sus principales miembros serán mayores. Efectivamente, los incentivos de la DC para satisfacer las pretensiones del PS y el PPD, en este contexto, serán menores, corriéndose el riesgo de un alternativismo que ponga en peligro la mantención de la coalición.

B. ANALISIS LABORAL: El futuro de la política laboral del Gobierno: la necesidad de socializar sus contenidos y objetivos.

Las relaciones entre la CUT y el Gobierno parecen entrar en una etapa de normalización. En efecto, todo parece indicar que el próximo lunes 7 de septiembre la "mesa política" constituida a petición de la CUT sancionará una agenda y un cronograma preciso para abordar los temas pendientes y que interesan a la Central y al Gobierno.

No puede, sin embargo, considerarse que las perspectivas de las relaciones entre la CUT y el Gobierno, por un lado, y del debate público sobre las reformas y políticas laborales, por otro, tendrán las mismas características exhibidas con anterioridad al mes de agosto.

Así, tanto desde la perspectiva de la CUT, como desde aquella propia de la coalición gobernante, nuevos elementos y desafíos se plantean a partir de las fricciones originadas por el tema de la "reforma de las reformas".

I. La perspectiva de la CUT y proyección de las relaciones con el Gobierno.

Si uno se atiende al tenor de las discusiones sostenidas al interior del Comité Ejecutivo de la CUT y los planteamientos reiterados por sus dirigentes, es posible señalar como componentes fundamentales del diagnóstico y proyección futura de la acción de la Central, los siguientes:

- a) Se acepta, ya sin dudas, que existen dos visiones muy distintas respecto de la situación laboral actual: la del Gobierno (que se muestra con una coherencia, claridad y consistencia que para muchos dirigentes sindicales fue sorpresa), y la de la propia CUT. Se ha cancelado, por tanto, toda expectativa de ambigüedad o fisura en la posición del Ejecutivo.

Esta clarificación sustentada en la cohesión interministerial contradice el argumento central por el que la CUT solicitaba la constitución de una "mesa política". En efecto, la incorporación de "ministros políticos" es vista como una especie de supervisión al Ministerio del Trabajo basada en la consideración de criterios políticos de los que supuestamente carecería la gestión de esa cartera de Estado. En la práctica, la unívoca actitud de la representación ministerial sobre la materia ha vuelto a ratificar que el Gobierno sólo tiene una postura, la que es definida por el Presidente y aplicada coherentemente por los ministros.

- b) Se mantiene como prioridad política de la CUT el tema de la reforma de las reformas. Es cierto que ya no se plantea como condición ineludible para reanudar el diálogo bipartito y/o tripartito. Sin embargo, para la mayoría de los dirigentes sindicales, la reforma de las reformas (y aquí la militancia política no explica los posicionamientos) es percibida como requisito fundamental para que el sindicalismo chileno pueda desarrollarse, dejando atrás el grado de debilidad orgánica.

Es por eso que la CUT demanda del Gobierno, si no un patrocinio a las reformas, al menos una actitud pasiva ante el "lobby" parlamentario que los dirigentes sindicales actualmente realizan ante congresales de la Concertación.

Así, la CUT intentará promover sus reformas laborales por la vía de las indicaciones parlamentarias. Tal estrategia, si bien no tiene viabilidad legislativa en el actual período, tiene sí el efecto indirecto, pero evidente, de posicionar las reformas laborales propuestas por la Central en el centro del debate programático sobre política laboral del futuro gobierno de la Concertación.

- c) Un tercer elemento que permite proyectar el comportamiento futuro de la CUT dice relación con la conducción y/o potenciación de conflictos sectoriales.

A la CUT, y especialmente a aquellos dirigentes con aspiraciones electorales ya sea en el congreso o al interior de sus partidos, le resulta fundamental mantener niveles de visibilidad pública. Tal objetivo se logra encabezando los conflictos, mediando en su solución, y cosechando los frutos políticos y sindicales que se derivan de un resultado exitoso.

Por otro lado, mientras más "dura" es la relación con el gobierno, más se debilita el pacto tácito entre éste y la Central por el cual la CUT ha jugado un rol claramente morigerador de los conflictos sectoriales durante los primeros años de gobierno.

En consecuencia, la suma de estos dos factores deriva en menores incentivos para aplacar los conflictos. Por el contrario, es posible esperar de la CUT una gestión orientada a canalizarlos, e incluso, a patrocinarlos.

- d) La canalización y patrocinio de los conflictos sectoriales se enfrenta, sin embargo, a una dificultad derivada de la creciente autonomía y capacidad orgánica exhibida por algunas organizaciones sindicales intermedias.

En efecto, en la medida en que sectores como Fenats y Anef han conseguido estructurar relaciones autónomas y especializadas con el gobierno, estas entidades reclaman para sí la gestión y conducción de su interlocución ante el Ejecutivo. Tal postura resulta lógica, siendo, además, el resultado inevitable -y quizás deseable- de la especialización, modernización y fortalecimiento de la organización sindical o gremial en sus niveles intermedios.

Por tanto, la importancia y viabilidad del rol "subsidiario" de la CUT es inversamente proporcional a la capacidad técnica y fortaleza orgánica que demuestren los dirigentes de las entidades gremiales intermedias para resolver sus propios problemas.

Incipiente, pero evidente prueba de lo anterior es, por ejemplo, la actitud asumida por la Anef y, en menor medida, Fenats respecto del debate sobre el aguinaldo de Fiestas Patrias y el reajuste del sector público.

- e) Otro elemento fundamental para la determinación del curso futuro de las relaciones entre la CUT y el Gobierno estará dado por el resultado de la asamblea sindical convocada por la CUT para el próximo martes 8 de septiembre. De la asistencia a la asamblea, y del tipo de evaluación y mandato que allí surja, dependerá buena parte del curso futuro de las acciones de la CUT. En todo caso, es ya conocida la tesis cuya ratificación se propondrá a los dirigentes sindicales que constituyan la asamblea. En efecto, se trata de la conjunción y complementación del diálogo (bipartito y tripartito) y la movilización social.
- f) Uno de los principales puntos de coincidencia entre la CUT y el Gobierno está dado por la necesidad de fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales.

Mostrar avances en esta materia es fundamental por variadas razones. En primer lugar, asegurar el debido cumplimiento de las normas es el paso previo a su evaluación. La solidez y coherencia interna del argumento gubernamental en el sentido de evaluar la aplicación de las normas laborales para después pronunciarse sobre la conveniencia de modificarlas, exige asegurar el debido cumplimiento de la legislación laboral.

Por otro lado, la fiscalización de las normas modifica el eje de la discusión, y lo centra **al interior de las reglas del juego vigentes**, y no fuera de ellas, como es el caso de la reforma a las reformas.

Por último, y contra lo que pudiera pensarse a primera vista, la Confederación de la Producción y el Comercio, en cuanto entiende que el incumplimiento de las normas laborales supone competencia desleal entre productores y comerciantes, se ha mostrado interesada en avanzar hacia una mayor fiscalización de las normas.

En suma, el tema de la fiscalización genera consenso tripartito en términos generales, y permite centrar la discusión en el cumplimiento y no en la reforma de la legislación recientemente aprobada.

Por tanto, esta es una área que debiera abordarse prioritaria y urgentemente en el marco de la reanudación de las instancias tripartitas hoy suspendidas.

II. La política laboral desde la perspectiva de la Coalición Gobernante.

Distinto en el análisis y los que se aprecian desde la perspectiva de la coalición gobernante.

1. Gobierno.

La socialización interna: Consejo de Gabinete.

Una de las virtudes más salientes de la postura del Gobierno frente al conflicto suscitado con la CUT ha sido la coherencia, lealtad y consistencia manifestada por la totalidad de los ministros participantes en las reuniones.

Premisa fundamental para que los ministros del área política y económica expresaran pública y privadamente su pleno acuerdo con la gestión del Ministerio del Trabajo ha sido la socialización de información y criterios al interior de ese grupo interministerial. Así, la coordinación es el fruto de la homologación de información, estilos y objetivos de todos por parte de todos los ministros participantes.

Resulta fundamental que esta socialización u homologación se extienda y consolide a todo el Gobierno. Para tales efectos, parece **recomendable destinar un Consejo de Gabinete para difundir los contenidos, principios y objetivos de la política laboral del Gobierno.**

2. Los partidos y las bancadas.

Hemos identificado en informes anteriores los serios riesgos que involucraría un "escalonamiento programático" de los partidos de la

alianza respecto de las políticas y normas laborales en una perspectiva de futuro. Baste con señalar, por un lado, el nivel de incertidumbre que tal situación provocaría en los agentes económicos y, por otro, la conflictiva situación que el señalado escalonamiento significaría para los partidos de la Concertación entre sí, y de éstos con la CUT.

Es cierto, sin embargo, que al interior de los partidos de la Concertación y entre los propios parlamentarios de la alianza existen quienes discrepan **conceptualmente** -esto es, en términos sustantivos- de las políticas y leyes laborales adoptadas por el Gobierno. Son estos los sectores dispuestos a converger con la CUT en torno a un esfuerzo por transformar sus postulados en propuestas programáticas para un futuro gobierno de la Concertación.

Respecto de estos sectores, la socialización y difusión de los principios, medidas y objetivos de la gestión laboral del Gobierno, con ser muy necesaria, no es suficiente. En efecto, se requiere un esfuerzo que trascienda la mera difusión o información y tenga una cierta eficacia persuasiva.

Esta gestión resulta urgente y fundamental para responder exitosamente a dos desafíos distintos pero coincidentes:

a) **El problema de la vía indicativa (legislativa) de la CUT.**

La acción de lobby parlamentario de la CUT conlleva el riesgo casi cierto de divisiones al momento de votar las leyes laborales en que tales indicaciones recaen.

Por otro lado, la bancada socialista ya ha manifestado su disposición a apoyar legislativamente las propuestas de la Central. Para tal efecto, se ha elaborado una moción que modifica la normativa actual sobre terminación de contrato de trabajo.

Senadores DC, por su parte, también parecen dispuestos a patrocinar ciertas iniciativas que, siendo sustentadas por la CUT, no cuentan con la aceptación del Ministerio del Trabajo.

No se trata de inhibir la autonomía parlamentaria esencial a su función, pero ciertamente parece necesario desplegar un esfuerzo adicional de socialización de contenidos que, advirtiendo sobre los riesgos que tal situación involucra, tenga un efecto persuasivo que aminore el costo político que supone volver a discutir sobre las reformas laborales ya aprobadas.

b) **La labor programática de los partidos en materia laboral.**

Es probable que el previsible fracaso legislativo de las posturas sustentadas por la CUT en este ámbito se

traduzca en un desplazamiento del debate a la arena de la discusión programática. Aquí los riesgos son distintos. La perspectiva electoral hará difícil resistir la tentación de asumir compromisos programáticos patrocinados por la CUT. Por otro lado, es del interés de los partidos (básicamente el PS y la DC) cuidarse de aparecer contradiciendo frontalmente la posición institucional de una CUT en la que nadie quiere perder representación y/o control político.

Estas presiones o tendencias, a su vez, deben conciliarse con la necesidad de evitar propuestas programáticas que generen incertidumbres fundamentales sobre las reglas del juego que enmarcan la actividad económica y empresarial.

Con todo, el debate está abierto y, para que éste sea lo más funcional y consistente con la gestión laboral del gobierno, parece necesario avanzar paralelamente en dos aspectos:

- Realización de un taller de especialistas laborales de los partidos de la Concertación en los que se socialice información y se establezcan ciertas pautas mínimas que reduzcan la magnitud de las discrepancias a niveles que no supongan riesgos serios en la elaboración del programa.

Este taller, más bien reducido en su convocatoria, debería ser seguido de un seminario de tipo programático como aquellos que, sobre otros temas, está desarrollando la Concertación.

- Elemento fundamental para el buen éxito del esfuerzo de socialización y persuasión resulta la generación de un concepto simbólico y orientador que englobe toda la gestión laboral del Gobierno. En efecto, así como el concepto "crecimiento con equidad" constituye la carta de presentación de la Concertación en materia económico-social, parece importante dotar el esfuerzo persuasivo y ordenador que el Gobierno debiera asumir en materias laborales de algún concepto similar que sirva de núcleo y símbolo de la política laboral de la Concertación.